



LECCIONES TEÓRICO-POLÍTICAS DE LA COYUNTURA EN CHILE (1970-1973)

Hugo Zemelman *

Autor Invitado de Honor - CHILE

N/D.: En el cuadragésimo aniversario del cruento golpe militar que segó la vida de Salvador Allende y acabó con el gobierno socialista del movimiento de la Unidad Popular, el maestro Hugo Hernán Zemelman Merino nos ofrece un documento histórico de profunda reflexión política, que publicamos como homenaje póstumo al hijo dilecto de Concepción. Este texto inédito es una versión exclusiva para Teuken Bidikay, generosamente cedida a nuestro director por el gran intelectual chileno, pocos días antes de su lamentable desaparición.

Resumen

Como producto de su último trabajo investigativo, orientado a reconstruir la historia política reciente de Chile, este texto ofrece una visión crítica de aquel breve periodo de la Coyuntura (1970-1973), que significó un hito definitivo en la historia de la democracia chilena. El autor describe sin eufemismos, las condiciones en que maduró el proyecto político de la Unidad Popular, las reacciones de la alianza burguesa y los errores cometidos por la coalición de gobierno, que finalmente determinaron el colapso del gobierno popular y del mismo proyecto político. Luego de plantear las decisiones y acciones que hubieran salvado la crisis, Zemelman se esfuerza en conectar la coyuntura de 1973 con la coyuntura actual de su país, en un intento por leer de manera más clara los factores determinantes del inmediato futuro político de esta nación.

Palabras clave: Coyuntura política en Chile, Análisis político, Política chilena, Análisis de coyuntura, Gobierno de Unidad Popular.



* (1931-2013): Licenciado en Derecho de la Universidad de Concepción (Chile), realizó estudios de Sociología Rural de la Universidad de Wageningen (Holanda), Maestro en Sociología de FLACSO, Fundador, Presidente y Director del Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina IPECAL. Miembro del Comité Científico Internacional de Teuken Bidikay y autor de una gran cantidad de libros, artículos y ensayos sobre los problemas del agro, movimientos sociales, educación superior, sociología, historia, política, epistemología y ética, entre otros temas.

Contacto: secretaria_general@ipecal.edu.mx



Abstract: As a result of his latest research work, aimed at reconstructing the recent political history of Chile, this text offers a critical view of the brief period of La Coyuntura (1970-1973), which marked a definite turning point in the history of Chilean democracy. The author describes without euphemisms, the conditions under which advanced the political project of the UP, the reactions of bourgeois alliance and the mistakes made by the coalition government, which eventually determined the collapse of popular government and of its political project. After specifying the decisions and actions that could have prevented the crisis, Zemelman connects the conjuncture of 1973 to the present situation in your country, in an attempt to read more clearly the determinants of immediate political future of this nation.

Keywords: Political Conjuncture in Chile, political analysis, Chilean Politics, Conjuncture Analysis, Popular Unity government.

Vista desde la distancia y después de 40 años, la experiencia del movimiento de la Unidad Popular de Chile plantea interrogantes teórico-políticos propios del momento histórico que le dio abrigo, y hay que hacer el esfuerzo por recuperar esas enseñanzas, con el propósito de establecer una relación de continuidad y/o discontinuidad con lo que podría estar planteándose en el actual momento histórico del país.

El periodo de la coyuntura 1970-1973 se caracterizó por una política de cambios, fundamentalmente económicos, sin romper con el orden institucional. Ello generó distorsiones en sus efectos como resultado de las tensiones creadas al cuestionarse la ideología dominante en la función que ésta cumplía de dar estabilidad al sistema político. Se pusieron al descubierto las limitaciones de la democracia liberal representativa, al facilitar *-en razón de su imaginario simbólico asociado a la movilidad social-* que las políticas económicas orientadas a lograr una mayor justicia social y un verdadero control democrático de los recursos naturales, se interpretaran como atentatorias contra la libertad individual. Las reformas orientadas a ampliar la democracia social se interpretaron como intentos antidemocráticos.

No se puede desconocer que al impulsarse cambios estructurales sin modificar las reglas políticas de funcionamiento del sistema, se facilitó la conformación de una contraofensiva ideológica con base en una muy establecida orientación mesocrática de la sociedad chilena, que resistía cualquier forma de polarización. Por lo anterior, se planteaba por parte del Gobierno, la importancia de comprender la naturaleza del sujeto que respaldaba sus políticas, así como la naturaleza de las fuerzas antagónicas.



Desde nuestra perspectiva, se abría con el proyecto político de la Unidad Popular un periodo de desarrollo y maduración de una nueva fuerza social que venía desarrollándose desde antes, pero que ahora se trataba de que tuviera la capacidad de sostener no solamente las medidas estructurales, sino, principalmente, tener la capacidad de promover una ofensiva en el campo de los valores que, además, se tradujera en una política de cambios institucionales a manera de fortalecer el espacio político con un nuevo significado: el de poder potenciar las medidas adoptadas por un capitalismo de corte keynesiano en un programa más profundo de cambios en beneficio de las mayorías excluidas.

Lo que decimos suponía complementar para enriquecer las propuestas estructurales con una ofensiva educativa y cultural que contribuyera a crear la conciencia de una nueva democracia. Lo anterior representa un cambio en la tradicional relación entre los sectores medios y populares, que venía conformándose desde hacía años bajo la impronta del sello dominante de una fuerte subordinación de los sectores populares. Este cambio además contribuía a cuestionar políticamente la subordinación que caracterizaba, a su vez, a los sectores medios respecto de los grupos económicos oligárquicos y monopólicos. La emergencia de un movimiento popular bajo la dirección de la Unidad Popular, en particular bajo el liderazgo de Salvador Allende, que se caracterizaba por su gran capacidad de autonomía, mostró las limitaciones de la democracia liberal representativa en relación con los intereses de los grupos dominantes. En efecto, se comenzaba a gestar una nueva fuerza. Pero, principalmente, se comenzaba a constatar a partir de esta emergencia, que en el mediano y largo tiempo el movimiento de la Unidad Popular representaba el germen de un nuevo actor social y político que con el tiempo tomaría mayor fuerza orgánica y, en consecuencia, eficacia política.

Era el comienzo. Por lo mismo, había que reaccionar para impedir que se llegara a una situación irreversible. Por ello es importante la referencia a los diferentes mecanismos que se desataron para crear la imagen de un cambio irreversible, que llevaba ineluctablemente a una pérdida del control sin posibilidades de recuperarlo. En consecuencia, se requería de una reacción drástica que impusiera reglas que garantizaran que el juego político, que había caracterizado a Chile durante medio siglo, no pusieran en riesgo la dominación. Es lo que se tradujo en las reformas institucionales que se plasmaron en la constitución política de 1980. De ahí que no sea exagerado sostener que esta constitución encarna el mayor logro del golpe de estado. Representa la reforma institucional un conjunto de mecanismos



que garantizan un control del sistema que, en nombre de la democracia, sirviera de resguardo a determinados intereses, con la ventaja de que estos intereses tanto nacionales como extranjeros quedaban cobijados por una institucionalidad protegida, como el conjunto de condiciones que garantizaban la imposición de un modelo económico y social en el largo tiempo histórico. En otras palabras, se legalizaba la eliminación de las alternancias entre proyectos de sociedad.

El significado de esta reforma fue de tal magnitud que pudo cambiar el modo de hacer política, reduciendo el espacio de lo público a los requerimientos del proyecto económico político dominante; una situación que permanece hasta hoy. Por esta razón, la reforma constitucional que se plantea en la actualidad vuelve a poner sobre la mesa de discusión los mecanismos que garanticen que el juego político no llegue a afectar los intereses económicos y políticos dominantes. Las diferencias respecto a la coyuntura de los años 70' descansan en que, durante los últimos 40 años transcurridos desde el golpe militar, los sectores populares se han transformado por estar sometidos a un fuerte proceso de enajenación como resultado de una movilidad que, más que real, ha sido simbólica, pero que ha servido para imponer una ideología que fortalece el individualismo y las expectativas de ascenso social, como simple logro de esfuerzos personales. En el tiempo transcurrido, este proceso también ha cumplido la función de facilitar la cooptación de numerosos sectores sociales y su consiguiente despolitización, y esto es lo que aparentemente está reconociendo sus límites con los actuales movimientos emergentes, especialmente de la juventud.

En efecto, la pregunta central que podríamos formular gira en torno a la concreción que puede detener la apertura del juego político, en cuanto a crear espacios para cambios en el modelo económico y político dominante. O, en otras palabras, preguntarnos si se puede mantener indefinidamente un modelo de empate político, con un poder cupular altamente concentrado y una marginación que no se puede ocultar. Desde estas preguntas, resultan significativas las lecciones que se desprenden de ambas coyunturas en cuanto plantear una relación de continuidad y/o discontinuidad entre ellas, de manera que se alcance mayor claridad sobre el futuro que se puede construir en Chile. Las preguntas que surgen abren posibilidades para una compleja reconstrucción histórica. En relación con la coyuntura 1970 – 1973, nos basamos en la premisa que permite abrir un conjunto de preguntas problematizadoras acerca del modo de enfrentar la construcción de un proyecto de sociedad:



¿El 11 de septiembre de 1973 representó un fracaso posible de evitarse?

¿Constituyó una demostración de la imposibilidad de que el capital internacional pueda continuar aliándose con la burguesía interna dentro del marco de un sistema de dominación democrática liberal?

¿Es la crisis de la fracción política populista de la burguesía que, en el transcurso de los últimos decenios, habría desarrollado sus propios intereses financieros, agrarios o comerciales, y en consecuencia, implica su reemplazo por una casta político-castrense, por lo menos durante los últimos meses de 1970 y primeros meses de 1971?

¿La irrupción del movimiento popular fue posible por la política de alianza y concesiones que la clase política liberal promovía como respuesta a las presiones de la clase obrera?

¿La derrota del movimiento popular conlleva también su derrota, pues se abre un periodo de dominación castrense que contiene en sí las posibilidades de crear las condiciones para una dominación autoritaria aunque legal en beneficio de los grupos monopolistas y favorable al capital extranjero?

Cuestiones de Dirección Política

La experiencia muestra cómo la dirección del movimiento representado por la Unidad Popular no comprendió, desde los primeros momentos que eran determinantes, que ciertas fracciones de la burguesía dominante podrían haberse comprometido en políticas de cambio institucional en cuyo espacio podrían haberse continuado cambios estructurales ya iniciados; es decir, entender que se tenía que cuidar una relación entre los cambios estructurales y cierta institucionalidad que garantizara un juego político. De lo contrario, una política que condicionaba el proceso de cambio a políticas restringidas a afectar la estructura de la propiedad, necesariamente iba a crear las condiciones para que no se continuara manteniendo la escisión al interior de la clase que estaba en el poder. Una política orientada en un primer momento a impulsar ajustes institucionales, acompañada de una ágil política de comunicaciones, podría haber permitido profundizar y mantener las condiciones que permitieran el aislamiento de los sectores más retrógrados y comprometidos con un esquema monopólico y de abierta dependencia del capital extranjero, como lo habían venido demostrando diferentes estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).



En este marco se planteó una posible coparticipación en la dirección del proceso con grupos pertenecientes a ciertos sectores de los grupos dominantes, de manera de mantener la división en el campo antagónico. La necesidad de esta política resulta clara si se atiende a las distorsiones que produjeron los cambios puramente económicos cuando permaneció inalterado el control de los aparatos ideológicos. Los cambios que se plantearon en la estructura económica afectaron posiciones sociales, especialmente en los sectores medios, en lo que respecta a su diferenciación social y estabilidad. En este sentido, una de las dificultades políticas se encontró en la incapacidad de reconocer por la Dirección Política, el carácter de grupo nexo que podía tener la Democracia Cristiana, esto es, su papel de aglutinador de alianzas entre sectores medios y populares, lo que fortalecía las bases sociales del sistema de dominación, pero también desarrollaban fuertes contradicciones internas como lo demostró, en un momento, el rompimiento con el sometimiento a los sectores más conservadores, lo que se ilustra con la votación en el congreso pleno el 24 de octubre de 1970 de los Demócratas Cristianos a favor de la candidatura de Salvador Allende.

Lo que decimos suponía una política que no se agotara en los aparatos del partido, sino que abarcara su base social cuidando de no polarizar los intereses partidistas. Ello requería que la política orientada a reforzar la alianza entre sectores medios y populares no se identificara con los partidos de izquierda -*Partido Comunista (PC)* y *Partido Socialista (PS)*- sino más bien, con un poder suprapartidario y con cierta dirección carismática como la que representaba el presidente Allende, como líder popular. En este sentido, podríamos sostener que no se ejerció el poder de Allende, por el contrario, que éste delegó su capacidad de influencia en los partidos, de manera que la posibilidad de refundar la alianza entre sectores medios y populares quedó atrapada en las lógicas de influencia de los partidos.

Cuando la lucha política se da en las condiciones en que los propios grupos dominantes no han sido desposeídos de sus medios de control ideológico (prensa, televisión, radio, incluso organizaciones sociales de la sociedad civil), y por ende, conservan la fuerza para estructurar alianzas, su derrota supone precisamente desarmar este poder ideológico. No es suficiente debilitar al enemigo en sus bases materiales, ya que el poder dominante no consiste solamente en un poder económico, sino además en la capacidad de manifestaciones ideológicas; en este sentido, su debilidad económica no significa necesariamente su derrota, a menos que vaya acompañada de una política de aislamiento que debilite el manejo del imaginario colectivo.



En esta perspectiva, la relación que se establece entre los cambios en la estructura económica y lo que ocurre en el plano de las manifestaciones ideológicas ha tendido históricamente y en otras experiencias, a resolverse mediante el ejercicio del poder total. No obstante, cuando ello no es posible por una cuestión de viabilidad, quedamos ante el hecho escueto de que se puede avanzar por la vía de los cambios económicos, pero, simultáneamente, retroceder en la consolidación política del proceso.

La política económica del Gobierno no dio por resultado una polarización favorable a su proyecto, en la medida en que no se orientó a romper el dominio ideológico, pero especialmente porque no se dio el tiempo para que la emergencia del nuevo sujeto, como lo señaláramos, tuviera la cohesión y claridad de perspectiva, así como la organización suficientemente asentada, para ser realmente portador de un efectivo contrapoder, capaz no solamente de actuar en el plano productivo y de la distribución, sino además, abarcando el plano de los valores ,y en general, el del imaginario. Los embriones organizativos y de espacios de poder no superaron el plano puramente reivindicativo, o en el mejor de los casos, cierta capacidad defensiva como fueron los cordones industriales. En efecto, la ruptura del dominio ideológico era fundamental para aislar a los sectores más retrógrados; aunque es más lenta esta ruptura ideológica del bloque dominante que las distorsiones que la política económica de cambio puede experimentar por efecto de la ideología dominante. A partir de esto, se plantea la cuestión del empleo del aparato del Estado como instrumento para promover cambios económicos, políticos y culturales.

El Estado burgués como instrumento de poder revolucionario

El empleo del aparato de poder para romper con la ideología dominante exige una capacidad de los cuadros políticos para utilizar los mecanismos institucionales existentes, pero liberada de los compromisos culturales que implica el funcionamiento y uso de tales mecanismos. Así como Lenin dedicó gran parte de su esfuerzo teórico, preparatorio para la acción revolucionaria, a caracterizar la naturaleza y ser del Estado que debía ser destruido, lo mismo exigía el proceso revolucionario chileno, que se enfrentaba a la necesidad de situarse dentro de la estructura del estado burgués. Pero su análisis debía situarse no sólo en los límites del horizonte leninista, sino en el marco del compromiso con el statu quo, es decir, plantearse el dominio de las pautas culturales que regían su funcionamiento. No se trata sólo de comprender la naturaleza represiva del Estado, sino, penetrar en los diferentes aspectos



concernientes a su dinámica interna, entre los que cabe mencionar algunos su relación como estructura burocrático-institucional con la legitimidad de clases; el surgimiento en su interior de ciertos grupos sociales que, siendo instrumentos de dominio de la clase dominante, mantienen alguna autonomía respecto de ella; la tendencia, derivada de lo anterior, de que partes del conjunto del aparato del Estado pudiesen evolucionar como grupos de presión; la posibilidad de articular dentro de su estructura institucionalizada un sistema informal de poder con base en un centro de decisión, aunque fueran independientes uno del otro en el plano formal, etc.

La primera circunstancia que confiere especificad al problema del Estado se refiere a que no fue objeto de un ataque frontal por parte de la clase obrera chilena y sus aliados, sino que ésta entró en su estructura posesionándose de ciertos resortes fundamentales del mismo. Se transformó el Estado en un verdadero campo de batalla entre clases en pugna, con lo cual el problema no era su “destrucción”, como resultado de la derrota de la clase dominante por su antagonica, sino más bien, su desarticulación (paralización) que se corresponde con el proceso mismo de definición de la lucha de clases. De ahí que esta lucha no podía definirse ideológicamente en términos de la desaparición de ese Estado (por mucho que ese fuera el producto final de la lucha entablada), ya que el contexto de enfrentamiento suponía obtener una desarticulación favorable a los centros de poder controlados ya desde dentro por las fuerzas populares.

Lo anterior se proyecta en que la política de cambios, en el plano de la estructura económica, exigía ser complementada con una doble política de alianzas: con la burocracia, por una parte y de neutralización de las Fuerzas Armadas como grupo estamental, por la otra. Con la burocracia, porque a pesar de la condición de grupo instrumental de la burguesía (y en particular de la fracción dominante de ésta), fuertes sectores de ella eran capaces de desarrollar intereses autónomos. Como ilustración de su carácter instrumental podemos citar la división del Partido Radical en el Partido Democracia Radical y más tarde en el Partido Izquierda Radical, que contribuyeron, por lo menos en el plano de las gestiones políticas, a dificultar cualquier posibilidad de entendimiento con la Democracia Cristiana; en cambio, como reflejo de su capacidad de autonomía respecto de la fracción dominante, hay que citar la conducta del Partido Radical Cénista, que permaneció hasta el final compartiendo responsabilidades en el Gobierno.

La neutralización de las FFAA, en cambio, planteaba el problema más complejo en la utilización del estado burgués como instrumento del poder revolucionario.



En este sentido, cabía desarrollar sus intereses institucionales, lo que procuró realizar el presidente Allende, pero sin el apoyo suficiente de los partidos (en particular, del Partido Socialista), por lo que su intento no pudo tener la fuerza y coherencia indispensable. La única posibilidad real que tenían las fuerzas populares era neutralizar las eventuales acciones militares haciendo armonizar sus intereses institucionales con la política general de cambios del gobierno. Es indudable que algunos de estos problemas se pueden percibir con mayor claridad después de los sucesos del 11 de septiembre. Sin embargo, desde antes era claro que, en la medida que no se estaba en una estrategia de ataque frontal en contra del Estado, era imprescindible una política de alianza con los sectores sociales enquistados en dicho aparato. Mucho más todavía cuando se demostraba la falacia de que un militante de un partido político popular podía, por el simple hecho de ser tal, desempeñarse como eficiente manejador de los mecanismos administrativos e institucionales disponibles. La contradicción entre roles políticos y administrativos nunca llegó a resolverse racionalmente, pues no se llegó a comprenderlo como un aspecto fundamental de la política estatal, es decir, de la utilización del poder institucional como parte del poder revolucionario.

Contrariamente, siempre se consideró que la racionalidad burocrática debía ser desterrada por el radicalismo de la racionalidad revolucionaria y en la práctica esto determinó una serie de conflictos innecesarios, en vez de enfrentarse a la primera como un instrumento imprescindible para el proceso. La incompreensión acerca de las limitaciones de la burocracia, pero a la vez, de su función indispensable para la coyuntura del proceso, condujo a un manejo del aparato estatal que, por su irracionalidad, ineficiencia y ligereza, muchas veces sirvió de base para acentuar las imágenes contrarias al Estado que la burguesía promovía con el fin de desacreditarlo, como mecanismo de control de sus intereses y de protección a los sectores dominados. La esquizofrenia de la dirigencia política del movimiento popular de colocarse ideológicamente fuera de la institucionalidad del Estado, aunque objetivamente estuviera dentro y utilizando sus mecanismos, produjo por una parte, una incapacidad de acción efectiva del gobierno y, de otra, gestó en el plano de la ofensiva ideológica un cuestionamiento anticipado de toda su estructura y, por consiguiente, se precipitó un antagonismo con los grupos sociales que reconocían su base de existencia en ella (principalmente los burócratas y los militares).

Se tenía una comprensión ideológica de la naturaleza represiva del Estado, pero se carecía de una real comprensión de las implicaciones que acarrearía tener que utilizarlo para empujar la política de transformaciones, lo que



significó que la su presunta naturaleza represiva a favor de los intereses de la burguesía se constituyera en un obstáculo para poder considerarlo un instrumento que podría ser puesto al servicio de los intereses populares, a pesar de que una parte del mismo había caído en manos de estas fuerzas sociales. Por lo mismo se consideraba que su utilización se transformaba en un freno para aquello mismo que promovía y se pensaba que ningún cambio podía ser real en tanto no se le destruyera, desconociéndose que su utilización implicaba de hecho una alianza con aquellos sectores que descansaban en su estructura, lo que suponía separar los cambios socio-económicos de un cuestionamiento anticipado del sistema de dominación, antes de que las fuerzas populares estuviesen capacitadas para activarlo.

En el fondo, el problema ideológico era separar el funcionamiento del aparato del Estado de los intereses de la fracción de clase que eran afectados en la coyuntura, y no hacerlo impulsado por apreciaciones esquemáticas del proceso, prescindiendo de las necesidades coyunturales y considerándolo como un todo indivisible, pues esto contribuiría a afianzar la alianza ideológica de la burguesía, ya que se forzaba una amenaza de todo el sistema de dominación. Tal separación era posible por la existencia de fuertes contingentes de fuerzas enquistadas en el aparato del Estado. La existencia de una fracción política populista facilitaba avanzar en la estructuración de un área de propiedad social y en la reforma agraria siempre que se le garantizara participar en el poder político y que una mayor intervención del Estado en la economía no atentara contra la subsistencia de la mediana y pequeña empresa; así mismo, que las transformaciones hacia una economía socializada no conllevaran una total transferencia del poder hacia el Estado centralizado. He aquí un punto especial de una alianza de clase que, al precio de una mayor lentitud en el avance del proceso, contribuyera a consolidar las nuevas estructuras de poder popular, que necesariamente debían surgir de los propios cambios en la estructura de la economía y, por consiguiente, debilitar los intentos de la fracción oligárquico-monopolista por reagrupar sus fuerzas aliadas en torno de un interés común: la defensa del sistema de dominación. Pero la mencionada separación también era necesaria desde la perspectiva de que cuando se impulsan cambios en la estructura económica de una sociedad en la que los valores de la ideología dominante *-principales instrumentos de manipulación para el ordenamiento de las fuerzas sociales-* experimentan grandes distorsiones y se dificulta su legitimación, se justificaba forjar una alianza como la señalada, que permitiera distinguir entre los intereses de la fracción dominante y el sistema de dominación.



El Poder Popular

La importancia de la estructura de poder reside en que la única forma de frenar la inercia cultural dominante es la participación en el ejercicio del poder de los nuevos grupos sociales emergentes. En este sentido, una de las principales tareas del Poder Popular (ya sea que se tratara de la porción de institucionalidad vigente apropiada por las fuerzas populares, o bien de las nuevas formas de organización surgidas por efecto de la presión por participar) era orientar una lucha ideológica para superar la etapa de la economía de consumo y sustituir sus necesidades por otras a partir de la práctica de decisiones de los propios grupos participantes. Si atendemos a que la burguesía basaba su propia ofensiva en los valores de la economía de consumo y en la defensa del sistema de dominación (democracia), era fundamental la contraofensiva ideológica de la Unidad Popular. Su debilidad se explica especialmente, no sólo por la carencia de una dirección única, sino también por otras causas de fondo, como la proporción de elementos pequeñoburgueses incorporados en la dirección que hacían que ésta fuera fácil presa el subjetivismo e ideologismo, desviaciones que se expresaron exactamente en la forma de enfrentar a los nuevos embriones del Poder Popular.

Se llegó a definir a las nuevas estructuras de poder más como objetivos ideológicos capaces por sí mismos de provocar los cambios necesarios de conciencia, que como instrumentos al servicio de una transformación. Así, por ejemplo, hablar de Poder Popular, o de contrapoder, sin atender al contexto económico en que surgía, a los grados de conciencia alcanzados por el pueblo, a la penetración de los valores dominantes en los sectores populares, a la naturaleza ideológica de la alianza de la burguesía, o a la necesidad de alianzas para demoler su bloque, lo transformaba de un hecho histórico fundamental, producto de una alteración favorable en la correlación de fuerzas, en una imagen ideológica carente de apoyo real, pero con suficiente fuerza para provocar el reagrupamiento del enemigo. Cuando decimos que no tenían suficiente fuerza material pero sí mucha de índole ideológica, estamos apuntando a que la organización de la fuerza de una clase debe ser expresión fiel del grado de conciencia alcanzado y no de la situación en que el conflicto de clase se ha resuelto a través del triunfo final. Esto último es finalismo político.

No existiendo sino como proyecto ideológico, el Poder Popular se constituyó en la fuerza que catalizó la conciencia de clase de la burguesía y de sus distintas fracciones, mientras que los trabajadores y sus aliados, por la misma



desorientación provocada por la multiplicidad de vanguardias políticas representativas de sus intereses, no se emancipaban de cierta dependencia de una estructura institucional, maltrecha y maniatada, representada por el Gobierno. A través de éste continuaban canalizándose todas las decisiones, de forma que la clase obrera no pudo consolidar sus propias formas de poder, que se desarrollaron con autonomía una de otra, aparentando tener una fuerza que no poseían. La raíz de lo anterior se encuentra en la confusión establecida por la dirección entre la fuerza de la clase con la fuerza de las vanguardias. Más claramente, la clase con el desarrollo de su conciencia política y la ampliación de su base material, representada en el crecimiento del área de propiedad social, reconocía posibilidades que se desvanecían por la liberación de representaciones políticas. Por eso es que la estrategia del Poder Popular, al estar impulsada en los partidos, más como expresión de la disputa entre ellos que como expresión de la clase, al confrontarse con la clase, determinaba una contradicción entre ésta y el Poder Popular, que consistía en que el forjamiento de las nuevas formas de poder exigía la integración de las distintas representaciones políticas de la clase obrera y de sus aliados, lo que en la práctica no sólo no ocurrió, sino que se mantuvo el proceso contrario.

De esta manera, las nuevas formas de poder se transformaban en el campo de batalla de las "vanguardias" cada vez más alejadas de la masa de clase, y ésta, en vez de convertirse en el real contenido de dichas estructuras de poder, se limitaba a constituir la clientela social de varios grupos superestructurales, empeñados en apoderarse del control de dichas estructuras y provocar su burocratización. El proyecto de creación de un Poder Popular, o de un antipoder, exigía pasar por una dirección unificada. De otro modo, reanticiparse a una correlación de fuerzas que no era necesariamente favorable. El Poder Popular tampoco podía cumplir las funciones de correctivo ante las limitaciones que ofrecía el Gobierno, cercado institucionalmente, pues entraba de lleno a servir de catalizador para el proceso de unificación entre las diferentes fracciones de la burguesía, en razón de representar el peligro involucrado en un cuestionamiento al sistema de dominación vigente. Por lo anterior, el Poder Popular no debía constituir el producto de un enfrentamiento contra el bloque cerrado de la burguesía, sino el instrumento de una alianza táctica cuyo objetivo fuera el fraccionamiento de dicho bloque. El fraccionamiento con que se enfrentó al proceso la burguesía, abría un tiempo útil para crear las condiciones que aceleraran la consolidación de las estructuras del movimiento obrero,



atomizado como fuerza organizada, aunque ideológicamente unificado en torno a la Central Única de Trabajadores, especialmente por el predominio del Partido Socialista y Comunista. La Central Única de Trabajadores (CUT) no disponía, a pesar de ello, de los instrumentos adecuados para pasar de una actitud pasiva, con énfasis en el reivindicacionismo de sus acciones, a una etapa en que asumiera responsabilidades directivas y de administración de Gobierno, como se suponía exigirle la transferencia de poder.

Fortalecer la unidad por la base y terminar con las rivalidades entre los partidos por ganarse a la masa de trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, constituía una etapa previa para el surgimiento de un contrapoder popular, capaz de antagonizar con la institucionalidad burguesa dominante. La transformación de los sindicatos en instrumentos movilización unitaria, de gestión económica y administrativa, y el proceso de unificación con la base popular representada en el partido D.C, definían la necesidad de la alianza para lograr el fraccionamiento de la burguesía. Sin embargo, para ello era indispensable: organicidad en la dirección política, ya que sin ésta no era posible transformar el área social de la economía y a los sindicatos en la base material y en los instrumentos; un Poder Popular efectivo y no puramente ideológico; y además, que su surgimiento no fuera tardío respecto al proceso de consolidación de la alianza de la burguesía. No era posible sin unidad en la dirección, porque los sindicatos eran preferentemente transformados en zonas de influencia de los diferentes partidos políticos, interesados en conservar sus clientelas a través de su control sindical. El caso chileno es demostrativo de cómo un proceso puede autodestruirse cuando su dirección política se ha convertido en una verdadera constelación de grupos de presión en permanente disputa. Es en esta perspectiva que debe entenderse el surgimiento del Poder Popular, como un producto del proceso de cambios, y no meramente como una solución de coyuntura ante el inminente desplome del aparato institucional controlado por las fuerzas populares.

Cuando el proceso revolucionario no destruye a la institucionalidad dominante, sino que se apropia de ella, como fue en parte el caso chileno, la intensidad de la ofensiva ideológica es la que marca la fuerza y rapidez del proceso revolucionario y no las medidas que operan en el trasfondo económico. El uso eficiente que se haga de los recursos institucionales disponibles asume una importancia fundamental para impulsar el proceso revolucionario. Como cuestión de fondo debe comprenderse que tales instrumentos, forjados precisamente para impedir su uso con fines revolucionarios, quedan sometidos a una doble racionalidad que, de no



resolverse, anula el cuadro político previsto para el cumplimiento de cierta función. Precisamente la incompreensión de los límites de tales instrumentos planteaba a la vez, su necesidad imprescindible, y el rechazo a su incapacidad, derivado de un artificio ideológico que partía del rechazo apriorístico de que ningún mecanismo del Estado burgués podía cumplir una función útil. Con esto se contribuyó poderosamente a un desconocimiento de la rutina burocrática cotidiana de tanta influencia en el forjamiento de una conciencia favorable para la gestión del gobierno, pero más que nada, para deshacer después la imagen de burocratismo e ineficiencia que promovía la burguesía en el contexto de su estrategia de descrédito del gobierno de Allende.

Hemos sostenido que el Poder Popular debía ser el producto de la ofensiva ideológica del proceso revolucionario y concretamente de una etapa de alianza de clases. En su lugar, se transformó en producto ideológico de la pequeña burguesía dirigente, pero con mucho más imagen ideológica que estructura orgánica. De ahí que pensemos que su influencia se hizo sentir mucho más como elemento de advertencia en el campo de la burguesía que como elemento movilizador para la clase obrera y sus aliados. La verdad es que, no obstante su creación abría enormes posibilidades, la división interna entre los partidos del movimiento popular determinó un retraso en la transferencia de poder desde las estructuras institucionales a las formas nuevas que se basaban en la creación del Área de Propiedad Social. Este atraso fue decisivo para que no se desplazara la lucha de clase hacia un plano ajeno a la ideología dominante que permitiera la elección a conciencia de las nuevas prácticas de dirección. Por el contrario, se disoció la praxis concreta de sus trabajadores del ejercicio del poder político, facilitando que la política del gobierno, orientada a fortalecer su base de apoyo, se redujera a la creación de una masa de apoyo pero sin llegar a plasmarla en una fuerza orgánica. Un ejemplo de esto es la gran capacidad de movilización que demostró la Unidad Popular en las grandes concentraciones callejeras y la ausencia de resistencia organizada contra el golpe militar.

La falta de organicidad real fue sustituida por la hipertrofia de imágenes que, en el fondo, hacían el juego de la burguesía precipitando una polarización favorable a sus intereses. En este sentido, la ausencia de correspondencia entre las medidas de organización de la fuerza social y la política de comunicaciones de masa, orientada a crear imágenes sin fundamento en los hechos, contribuyó a fortalecer la alianza ideológica de la burguesía y a aislar al proletariado. La ausencia de las capas medias en la estructura de poder popular como instrumento en el manejo del Estado contribuyó también



a dicho aislamiento y a que no se fraccionara el bloque de la burguesía. La necesidad de que dichos sectores sociales medios participaran, se fundamentaba en la conveniencia de mantener las formas de legitimación para impedir la aglutinación ideológica de la burguesía con un brusco quiebre en los patrones de legitimación del poder. Las fallas que hemos señalado se deben sustancialmente a que los análisis de clase siempre consideraron a la burguesía como un bloque, a la exagerada importancia concedida a las medidas económicas, que resultaba de no comprenderse la naturaleza esencialmente ideológica de la alianza burguesa, lo que por sí mismo distorsionaba sus efectos, y a la carencia de una dirección capaz de ser flexible tácticamente, entre otros factores.

En la crisis de octubre de 1972, se pudo gestar toda una estructura de gestión económica, especialmente de distribución que reemplazara a la vieja y tradicional capa de burócratas, o bien encerrarla en nuevas condiciones de funcionamiento. Por el contrario, en cada coyuntura y enfrentamiento tajante, se empujó a que la burguesía desplazara sus centros de decisión hacia el poder gremial, que involucraba un mayor grado de cohesión interna, y nunca se explotó su debilidad objetiva (en particular durante el primer periodo en que se reorganizaba) hasta provocar una crisis de hegemonía. No es extraño entonces, que la profundidad de las medidas de transformación (creación del área de propiedad social, reforma agraria, etc.) no se proyectara hasta un cambio en las formas de movilización de las masas, que, por lo general, se mantuvieron dentro de los moldes de una movilización electoral (pasiva); y en esa medida, no se estimuló a los nuevos grupos para que ejercieran el poder, en una nueva legitimación que reemplazase la detentada por la burguesía. Lo anterior es producto de no percibir la importancia de la dimensión ideológica tanto en el comportamiento de las fuerzas sociales, como en el forjamiento de sus alianzas, lo que se tradujo en que las políticas de movilización se orientaron principalmente a garantizar clientelas de influencia, en razón a que se imponían los intereses partidarios sin atender las nuevas exigencias que planteaba el movimiento social en su proceso de transformarse en un nuevo sujeto social y político. En este sentido, se planteaba avanzar rápidamente en la conformación de una nueva estructura orgánica de partidos, y al no ocurrir, inevitablemente se tendió a la autodestrucción de la nueva fuerza social emergente.

Recapitulación

Cuando se alcanza el poder político, pero importantes centros de decisión quedan todavía bajo control de los grupos dominantes, cabe preguntarse



cuáles son las posibilidades para sobrepasar los límites propios de la función cautelar de un orden político estable. En este contexto, la política de la Unidad Popular orientada a la construcción de un contrapoder, indudablemente cuestionaba el orden político, lo que suponía tener claridad acerca de la magnitud de la fuerza social que se tenía para enfrentar la respuesta de los poderes instituidos. En esta dirección, se planteaba la necesidad de impulsar una política de apertura de nuevos espacios de participación y decisión, y una política de alianza con los sectores sociales medios, ubicados en el andamiaje institucional, a partir de ubicar sus intereses estamentales por sobre los de pertenencia a clase. En este contexto, tenía prioridad una política de reformas institucionales antes que las políticas estructurales que afectaban no solamente el hecho objetivo de la propiedad, sino el imaginario asociado a ésta como ser: mantener las diferenciaciones sociales.

En la coyuntura 1970-1973, la idea de crear nuevos espacios de participación y decisión simultáneamente con una política de alianza con los sectores medios, fue visible en los últimos meses de 1970 y primeros meses de 1971, pero al no tener lugar, permitió que a partir de la segunda mitad del año 72 se produjera una desarticulación del Estado, agravada por la política de la propia burguesía monopólica financiera, a través del cerco institucional que condujo a un impase en la toma de decisiones. El propósito era generar un vacío de poder que necesariamente tenía que resolverse por el poder militar, de manera que las fuerzas armadas se transformaran en el poder rearticulador de la institucionalidad resquebrajada, imaginario que se impuso por el control de los medios de comunicación y también, por qué no decirlo, por la falta de una política de comunicación efectiva de la Unidad Popular y del Gobierno.

La situación anterior hizo posible que se rearticulara el campo de la burguesía incorporando a la fracción política populista que aparecía afectada por la inestabilidad institucional que se generó, como resultado de una polarización entre sus intereses y el proyecto de cambio que se avizoraba en aquel discurso que afectaba sus posiciones sociales e ideológicas. A este respecto, reviste enorme importancia lo que en nuestra opinión fue una sobreideologización del proyecto de la Unidad Popular, en cuanto afectó principalmente a los sectores medios, impidiendo cualquier posibilidad de acuerdo con la Democracia Cristiana. Este acuerdo suponía no haber creado una situación polarizada como ya se presentó en 1972. En el trasfondo de esta dinámica política se puede reconocer la falta de una conciencia clara acerca de la fuerza real disponible por parte del movimiento de la Unidad



Popular, pero también la falta de un horizonte de posibilidades que permitiera acrecentar esa fuerza en un tiempo determinado, para forjar un acuerdo que permitiera enfrentar posibles polarizaciones en el futuro desde un campo de fuerza mayor. Esta acumulación de fuerzas exigía como base una alianza que pudo gestarse en los últimos meses de 1971 y primeros meses de 1972, de manera que, a partir de mediados de 1972, pudiera darse un cambio en el eje de la alianza, privilegiando el programa de Gobierno en el plano del discurso ideológico y principalmente en el político.

En este marco, debe destacarse que la habilidad política de Allende, reforzada por su indudable carisma multclasista, no fue potenciada en la perspectiva de crear un campo mayor de fuerzas que permitiera enfrentar una polarización en el campo burgués, decantando con mayor claridad las diferencias de intereses entre los sectores medios y populares pro-demócratacristianos, en relación con la derecha económica oligárquica y monopólica. Esto dio lugar a que poco después del golpe se recompusiera una alianza de poder con abierta exclusión de los sectores medios, volviéndose a un esquema de dominación oligárquica, evidenciado en los primeros meses de la junta militar con el desplazamiento de los militares proclives a una política de recuperación de la democracia en el corto tiempo, lo que procuraría retomar la trayectoria económico-política del sector freísta de la Democracia Cristiana. Se plasmó entonces la formulación de un modelo económico neoliberal, claramente orientado a la concentración de la riqueza en la perspectiva de una política de acumulación, que requería de una nueva institucionalidad, forjada en la Constitución de 1980. Lo anterior permite comprender que una vez derrotada la dictadura militar (1989) sea reemplazada por una verdadera dictadura empresarial, encubierta por un sistema político democrático, pero carente de representatividad y del espacio público donde pudiera tener lugar la alternancia entre proyectos de sociedad.

2013: Lecciones Teórico-Políticas de la Coyuntura

¿Qué vigencia tienen estas lecciones de la coyuntura 1970-1973 para comprender la actual coyuntura de 2013 que enfrenta Chile? Las luchas desatadas desde 2011 por el movimiento estudiantil son las primeras manifestaciones de cómo el modelo impuesto con el golpe, tanto en el plano económico como institucional, comienza a mostrar sus primeras grietas, que reclaman respuestas de la clase política. Como nuestra preocupación no es la descripción de las actuales contingencias, tenemos que colocarnos ante los sucesos desde una perspectiva que nos permita ver el actual momento



histórico como concreción de un proceso iniciado hace 40 años. La historia no se repite pero siempre está presente, esto es, el presente siempre tiene alguna raíz en el pasado en la medida que la historia es memoria pero a la vez, demanda de futuro, como espacio para ser sujeto. En este sentido, lo acontecido en el pasado se hace presente como conciencia de futuro, así como el futuro se vuelve a concebir en cada momento enlazado con las experiencias que acompañan la constitución y desarrollo de los sujetos sociales y políticos. Desde esta perspectiva, cabe preguntarse si la institucionalidad vigente es la esencia de lo que se buscaba resolver con el golpe de 1973. En efecto, ¿el modelo económico institucionalizado tiene márgenes para permitir políticas de inclusión social, política y cultural, o por el contrario, su lógica de concentración necesariamente requiere de marginación, aunque ésta aparezca invisibilizada? Pero ¿qué vamos a entender por inclusividad y cuáles pueden ser las consecuencias políticas y económicas de promover una política orientada hacia la igualdad o la equidad?

Parece evidente que ninguna de estas preguntas puede desatender las condiciones en que ocurre la reproducción de los grupos que controlan la economía y el juego de alianzas que permite la actual institucionalidad; cuestión que además, no se puede contestar sin problematizar las relaciones de la economía chilena con la reproducción del capital global. Nos enfrentamos a la transformación del país en un mercado que en las actuales circunstancias económicas mundiales, favorece determinadas inversiones en commodities, pero que por su tamaño, no puede crear las condiciones para una efectiva competencia, por lo que estimula una rápida concentración monopólica. La verdadera pregunta es si este sistema económico es compatible o no con un sistema democrático representativo; pero también cabe preguntarse qué tipo de democracia y con qué funciones, es la que puede consolidarse y desarrollarse en el marco de un modelo de acumulación y concentración económica como el que opera en el contexto del actual momento histórico. Como han sostenido algunos analistas, el capitalismo ha inventado un látigo más sutil: el látigo del hambre *“desposeyendo a la población de todos los medios de producción que le permitían obtener su sustento, obligándole a vender su capacidad de trabajo por un salario para sobrevivir... (de este modo) lo que le arranca su libertad al ser humano, es la necesidad. El verdadero opuesto de libertad, es necesidad... La independencia política formal de un país no se convierte en libertad individual ni en auténtica soberanía nacional cuando se depende económicamente del exterior; un país sin soberanía económica no toma decisiones libremente, sino que se ve forzado a seguir lo que se impone del exterior”* (Boltnivik, 2010: 17).



El crecimiento con base en el consumo a través del endeudamiento, no puede conducir más que a una cada vez mayor dependencia, acompañada eso sí del imaginario de un ascenso social que carece de fundamento, por lo que en cualquier momento se derrumba. Las consecuencias políticas de este hecho se harán sentir principalmente en los sectores medios, más aún en todos los sectores sociales que hoy están enajenados por una expectativa de ascenso social que el modelo promete pero que no será capaz de cumplir. Lo que ocurra a partir de esta frustración está abierta a toda especulación, pero sin lugar a dudas, puede ser la causa de grandes trastornos sociales y políticos. Lo que se sostiene hoy en relación con el crecimiento del empleo, no ofrece ninguna certeza de que se puedan restablecer los treinta millones de puestos de trabajos perdidos en el mundo desde que comenzó la crisis en 2009. Pero, más aún, la mitad del empleo fuera de la agricultura se encuentra en la economía informal.

En este contexto se plantea que la pequeña y mediana empresa tengan acceso a financiamiento bancario y que se diseñen políticas de empleo para los jóvenes con cargo a recursos públicos. Y esto no se está haciendo casi en ningún lugar. Por el contrario, se observa que en nombre de la libertad y el respeto a las regulaciones, se está permitiendo a los bancos arrasar con la economía. Y también que en nombre de esa libertad se reduzcan los tributos a los más ricos, o que las empresas procuren deshacerse del salario mínimo. Estamos enfrentados a un capitalismo que no reconoce reglas, con lo que se está generando una presión social que puede llegar a ser insostenible, pues como señalaba Berlin (1969), *"ninguna actividad del hombre es tan completamente privada como para no obstruir nunca la libertad de los otros... hay que recortar a veces la libertad de algunas personas para asegurar la libertad de otros"*.

En la construcción de un modelo económico-político de corte neoliberal, Chile ha pasado de una experiencia exitosa de transición (lo que está ahora en discusión) a la de un país que está problematizando lo que significa un proyecto de democratización, en razón de comenzar a ser escenario de una alta polarización, acompañada de un tipo de conflicto que se corresponde, muchas veces, con cierto radicalismo ideológico carente de proyectos claros, lo que en el fondo puede representar una crisis en la reproducción social, pero también constituir síntomas de descomposición social y política sino se encuentran cauces para superar estas frustraciones. En este marco y a partir de 2011, se comienza a observar en Chile un cambio en el comportamiento de algunos sectores sociales, en particular de la juventud, en el sentido de pasar de actitudes y comportamientos adaptativos, conformistas



y esperanzadores en torno a la estabilidad institucional, a posturas de mayor cuestionamiento, incluso con disposiciones rupturistas. Estamos en presencia de cierto tipo de emergencias sociales, incluso de eclosiones, que no se veían antes, pero que no pueden interpretarse como el surgimiento de voluntades de cambio, pues como sostienen algunos analistas, no se puede confundir conflicto o conflictividad, con posibilidades objetivas de cambio. De ahí que podamos encontrarnos en la eventualidad de un escenario de profundas disconformidades, pero a la vez, de una gran impotencia para alcanzar soluciones socialmente compartidas.

El problema más profundo consiste en que la conflictividad puede mantenerse sin alterar mayormente el statu quo político, una expresión de la tendencia de no identificación partidaria que ha escalado desde un 14% en 1992 a un 50% en 2012, en circunstancia de que la proporción de población votante que efectivamente vota pasó de 86% en 1989 al 59% en 2009. Se comienza a producir un cierto vacío de participación que debilita las representaciones políticas, por lo que la democracia termina siendo una fachada legitimadora de los poderes fácticos. En el trasfondo de lo que decimos están los cambios psico-culturales que ha impuesto el neoliberalismo, como la fragmentación social y el modo consumista de vida, con una clara tendencia hacia la movilidad individual aunque ésta no sea efectiva, la cual tendrá que ser *“vencida en un largo plazo y con profundas luchas políticas ideológicas”*, que permitan volver a vislumbrar con creatividad, concepciones alternativas. En este contexto, es central el desafío de abordar la inclusión social, lo que requiere superar la obscuridad y sesgo de conceptos como el de que en la sociedad actual hay millones de “inadaptados para el empleo”, afirmación original de Fernando Henrique Cardoso, que buscaría justificar a los gobiernos oligárquicos, que gobernarán siempre sólo para una parte de la sociedad, excluyendo a los más pobres, ahora bajo el pretexto de un supuesto desempleo tecnológico. El desafío consiste, volviendo a Sader (2010), en desarrollar estrategias orientadas a *“promover el crecimiento constante del empleo formal y el aumento del poder adquisitivo de los salarios”*.

Pero ¿es posible que el actual modelo lo pueda lograr? ¿en qué medida son contradictorias estas metas con la lógica de reproducción del capital? ¿cómo se puede articular esta lógica con un sistema democrático caracterizado por el juego de fuerzas sociales con distintas concepciones de futuro? ¿o acaso el crecimiento dejó de ser una posibilidad que puede cumplir la función de inclusión para traducirse simplemente en acumulación y concentración? ¿la propia democracia, acaso, dejó de ser un espacio de opciones de futuro para



circunscribirse a un conjunto de reglas de funcionamiento de los poderes fácticos, pero legitimándolos? Estamos comprometidos a enfrentar que la democracia dejó de ser expresión de una pluralidad de concepciones posibles de futuro, que la propia división de poderes dejó de tener vigencia, subordinando su lógica a la del estado de excepción en la acepción de K. Schmitt, para convertirse en lo que decíamos: Un conjunto de mecanismos de legitimación de los poderes económicos. Desde esta óptica, hay que valorar e interpretar la importancia del orden institucional.

La cuestión es comprender la democracia como democratización, esto es, como espacio de proyectos, ya sea que estén presentes y organizados, o bien, que sean la expresión de nuevas emergencias sociales, pues concebimos al orden político como expresión del juego entre sujetos y/o actores sociales y políticos. Esto permite poner en el centro del debate el problema de la relación entre orden y proyecto, pues se trata de no congelar la dinámica social en las cristalizaciones del orden, dejando de lado la dimensión magmática de la sociedad según la argumentación de Castoriadis. En este sentido, la política es más que lo instrumental, ya que refiere al espacio de las voluntades sociales, siempre en proceso de consolidarse, por lo que no pueden agotarse en los límites de un orden establecido. Este orden no es sino el espacio institucional de un proyecto particular de sociedad, que en la actual coyuntura de Chile se expresa en un modelo caracterizado por evitar incurrir en el error de *“falsas respuestas al desafío de alcanzar una mayor igualdad en la distribución del ingreso, que no generará más que círculos viciosos, desde gastos fiscales inadecuadamente financiados hasta medidas tributarias de control de precios o de amenaza a la propiedad, que socavarán el sistema de incentivos, esencial para el crecimiento”* (Hurtado, 1988; Sanhueza, 2013). Este modelo encuentra su legalidad en la Constitución de 1980, pero a su vez reconoce una ilegitimidad de origen al ser el producto de un régimen de facto.

Cuando se plantea subordinar la técnica a la política, se procura romper con una lógica económica dominante a partir de rescatar espacios institucionales en los que se puedan reconocer diferentes orientaciones, incluyendo aquellas que contradicen lo que se ha señalado como propio del modelo económico chileno. En este sentido, hay que interpretar lo que significa romper con una concepción tecnocrática de la política pues conlleva a la idea de privilegiar “el diálogo deliberativo” que *“en las últimas décadas fue expropiado por grupo de técnicos que trazaban, más allá de todo debate y toda duda, la línea que separaba lo posible de lo imposible”* (Peña, 2013).



Por todo lo anterior, en la actual coyuntura el problema central es la situación del Estado, que según Michell (2010), tiende a *“concebirse como una empresa prestadora de servicios para los ciudadanos, que a su vez son concebidos como consumidores”*. La actual institucionalidad representa un espacio de equilibrio pero también de empate entre las fuerzas sociales, de ahí que la capacidad de cuestionar esa institucionalidad, sin romper reglas de juego político de alternancia, sea en este momento un desafío fundamental. No se trata de concebir la alternancia solo como un acto administrativo, pues lo que está en juego es la posibilidad de diferentes proyectos. Lo anterior supone conocer cómo operan los mecanismos de rentabilidad del capital, sus márgenes de ganancia, pero también atender el significado que el país tiene en la reproducción del capital mundial, esto es, su importancia como mercado en cuanto a su capacidad para generar márgenes de reproducción de la inversión. Decimos lo anterior ya que no es ajeno a las posibilidades que hay para cambiar la institucionalidad.

En esta dirección, la actual coyuntura se podría caracterizar como la tensión entre la lógica de concentración del capital y el uso del Estado como instrumento para consolidar sin opciones esta lógica; pero a la vez no se puede dejar de considerar la emergencia de nuevos actores antisistémicos, que no están dispuestos a aceptar una institucionalidad funcional para esta lógica de reproducción económica. De ahí que se plantee la recuperación de los movimientos sociales, incluso fuera de la órbita de los partidos, que se han transformado en un instrumento funcional de esta lógica económica. La contradicción a que apuntamos se especifica en el hecho de que la lógica de acumulación, al profundizar la capacidad de consumo en su afán de legitimación, ha generado las condiciones para el surgimiento de una tendencia medio-centrista que irradia sus efectos a diferentes capas sociales. En un primer momento, ello se tradujo en una ampliación de la base social, pero en la medida en que no se satisfacen las expectativas, la movilidad aparente ha ido generando marginación que puede expresarse en distintas formas, considerando que simultáneamente con el aumento del consumo, se ha producido la despolitización de vastos sectores de la población, lo que tiene, entre otras consecuencias, la pérdida de identidad de pertenencia.

Chile está profundizando un proceso anómico que tendrá consecuencias políticas en el mediano plazo. Ello podría explicar que gruesos sectores de la población encuentren su identidad, no en organismos partidarios, sino en figuras carismáticas cuya influencia y perdurabilidad en el tiempo puede ser frágil, y con ello no se hace sino fortalecer la tendencia a generar un vacío



de contenido del propio sistema democrático. Desde luego, lo que aparece como un resultado del desarrollo económico sostenido es la contradicción entre el modelo económico y un sistema democrático representativo sin espacios para impulsar alternancias de proyectos sociales. Si sintetizáramos lo que caracteriza a la actual coyuntura, podríamos hacerlo en los siguientes enunciados:

- Crisis en la transición que no concluye en ningún proceso democrático de espacios incluyentes, como se esperaba en 1989.
- Paso del consumismo conformista a una situación de conflictividad creciente, pero confusa en lo que se refiere a proyectos de futuro.
- Emergencia de nuevos sujetos y formas de hacer política que no aclaran suficientemente cómo podrán transformarse en nuevos sujetos con una mínima coherencia interna que les dé permanencia en el tiempo y capacidad de proyecto.
- Necesidad de enfrentar la reforma institucional desde la exigencia de espacios que permitan pluralidades de concepciones de desarrollo, en vez de limitarse a ajustes en torno de un mismo proyecto, pero que alivien las tensiones acumuladas que pueden conducir a una situación de ingobernabilidad que, como la experiencia lo ha demostrado, también puede encontrar soluciones de fuerza.

Perfil de las Coyunturas

Para efectos ilustrativos, podemos esquematizar en los siguientes términos las dos coyunturas mencionadas:

1970 – 1973: Se procuró un cambio dentro de la institucionalidad desde un proyecto que enfatizó sus aspectos ideológicos, descuidando su propia capacidad para construir viabilidad. La participación no era estrictamente ciudadana sino fuertemente militante en proyectos que reconocían su pertenencia en organizaciones concretas. Se daba una fuerte conciencia de pertenencia a conglomerados sociales amplios, acompañado de una visión de futuro que daba sentido al compromiso político, así como a la propia vida personal. A la vez, el proceso descansaba en el no reconocimiento de que el ritmo de definición y ejecución de las políticas, especialmente económicas, no coincidía con el ritmo de constitución de un nuevo actor que emergía y encontraba su primera representación en el liderazgo de Allende, pero no todavía en ninguna organización cohesionada y permanente.



2013: Se constata la presencia de un proyecto dominante que se transformó en espacio institucional, sin espacio de opciones. Se acompaña de una reducción de la política a actos de administración, y de la participación a actos de simple ciudadanía, aislada de una real conciencia política. Se refuerza la vieja tradición mesocrática chilena que alberga la categoría de "clase aspiracional", que no tiene proyecto propio, pues pretende definir y resolver sus expectativas dentro de los límites del proyecto dominante. Se acompaña de carencia de pensamiento a largo plazo y por lo tanto de una falta de relaciones de solidaridad que refuercen la participación en organizaciones.

Observación Final

Hoy, más que durante 1970-1973, es necesario impulsar una valórica para enfrentar la atroz mercantilización de la vida. Para ello se necesita rescatar la capacidad de construir desde opciones de futuro, a partir de recuperar la conciencia política capaz de denunciar la naturalización del modelo económico dominante, que deslegitima cualquier alternativa. Glosando a Clotario Blest, gran dirigente social, sí la tarea "es necesaria, es posible". Estamos en una transición hacia algo nuevo que abordamos sin otra certeza que la de tener que asumírnos como sujetos conscientes de que no hay otro futuro que no sea el de una sociedad basada en la reciprocidad y solidaridad humana. Y ello supone dar forma política a estos valores que conforman la condición misma de la dignidad de la gente. Por ello, quizás tengamos que volver a reunir nuestras fuerzas en torno a nuevas certidumbres, para volver a encontrar el camino de la liberación.





Referencias

- Berlin, Isaiah. (1958). "Two Concepts of Liberty". In Berlin (1969) Four Essays on Liberty. Oxford: Oxford University Press.
- Boltivik, Julio. (2010). Economía moral. Independencia y libertad. México: La Jornada.
- <http://www.jornada.unam.mx/2010/09/17/index.php?section=opinion&article=030o1eco>
- Hurtado, Carlos. (1988). "De Balmaceda a Pinochet: Cien años de desarrollo y subdesarrollo en Chile y una digresión sobre el futuro". Santiago de Chile: Logos.
- Michell, Beatriz. (2010). "La Nueva Forma de Reducir el Estado". En: Le Monde Diplomatique, diciembre, 2010.
- Peña, Carlos. (2013). "Un baño de realidad". Disponible en Internet: <http://www.elmercurio.com/blogs/2013/07/14/13480/Un-bano-de-realidad.aspx> Consultado 24.08.2013.
- Sader, Emir. Tesis equivocadas sobre América Latina. Disponible en Internet: <http://artepolitica.com/articulos/emir-sader-tesis-equivocadas-sobre-america-latina-y-el-mundo/> Consultado 12.06.2010.
- Sanhuesa, Gonzalo. (2013). "Chile en la Encrucijada". Santiago de Chile: La Tercera, 13 de julio de 2013.

